

En el Perú existen hoy más de cien organizaciones de afectados por la violencia política. No obstante su precariedad en materia de estructura y recursos, constituyen un movimiento en formación con un gran capital: líderes jóvenes.

De víctimas a ciudadanos

hildegard
willer



Si Angélica Mendoza hubiera nacido en Buenos Aires o en Lima, hoy sería probablemente un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad, como lo es Hebe Bonafini, la presidenta de las mundialmente conocidas Madres de la Plaza de Mayo.

Pese a que ha librado durante años una lucha pertinaz, arriesga-

da y terca por lograr justicia para los hijos desaparecidos a raíz de la violencia política que azotó al Perú en los últimos veinte años, la fama de esta campesina ayacuchana conocida como *Mamá Angélica* no ha logrado sobrepasar los círculos de derechos humanos.

El Informe Final de la Comisión de

la Verdad y Reconciliación (CVR) revela descarnadamente lo ocurrido en el país en la década de la violencia: la enorme mayoría de las víctimas han sido los más pobres, los excluidos de siempre. Víctimas, porque se los ha considerado ciudadanos de segunda o tercera categoría, condición estructural que se

refleja en la evolución de las organizaciones que las agrupan por un lado y las de derechos humanos por otro.

Mientras que hasta el 2000 las primeras han sido más bien pocas y marginales dentro del movimiento de derechos humanos, las ONG sí alcanzaron una cohesión importante que les permitió convertirse en mediadoras para avanzar en las políticas de derechos humanos.

Sin embargo, a partir del citado año el cuadro cambió: solo entre el 2000 y el 2003 han surgido 53 organizaciones de esta naturaleza. El 25 de octubre, entre 1.000 y 2.000 personas de todo el país afectadas por la violencia política marcharon por las calles de Lima para hacerse visibles ante el Congreso y el Gobierno y para pedir que se cumplan las recomendaciones del Informe de la CVR. ¿Quiénes son y qué proponen?

Víctimas, afectados, desplazados, madres: Una taxonomía

La vasta nomenclatura y la dispersión geográfica hacen difícil contar con información sistematizada de todas las organizaciones de víctimas o afectados que existen en el país. Oxfam Gran Bretaña ha hecho el intento de compilar las experiencias por medio de un mapeo y ha encontrado casi 118.

De ellas, sin embargo, pocas son las "históricas", es decir, las que se fundaron en los años ochenta. Entre estas hay que mencionar sobre todo a aquellas integradas por los familiares de desaparecidos: ANFASEP de Ayacucho (fundada por Angélica Mendoza),

COFADER y la organización de desplazados Jatary Ayllu en Huancayo.

Esta última se extendió posteriormente por todo el país y formó la coordinadora CONDECOREP, que agrupa a los desplazados, el grupo que más fuerza alcanzó en los años noventa y que, según el citado informe de Oxfam, se encuentra debilitada, porque muchos desplazados se han incorporado a las organizaciones surgidas en sus nuevos lugares de residencia.

El primer impulso para que estos desplazados volvieran a organizarse se produjo a fines de los

"Lo interesante de las organizaciones recientes de víctimas es que su liderazgo es mayoritariamente juvenil, cuya motivación central me parece es continuar la lucha emprendida por sus madres. No es un liderazgo que tenga afiliación política, tienen discurso más bien ético y que reivindica la dignidad de sus familiares"

noventa gracias al Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), que favoreció la agrupación de viudas y huérfanos; el segundo se lo debemos a la CVR. Según el mapeo de Oxfam, 40 por ciento de las organizaciones hoy existentes han sido creadas luego del trabajo de la CVR.

La gente se organiza por el tipo de afectación que ha sufrido y por regiones. Allí están las organizaciones de familiares de desapare-

cidos (ANFASEP, COFADER y ANFADET-CIDH son las más conocidas), las de desplazados (CONDECOREP y otras) y las de excarcelados. Ahora último han cobrado fuerza también las organizaciones de jóvenes huérfanos y las de mujeres afectadas por la violencia, dos sectores que han sufrido y aún sufren de manera extrema las consecuencias de la guerra.

¿Qué une a todos estos grupos, cuya mayoría funciona solo en el ámbito regional? Comparten el interés de que el Estado cumpla con otorgarles sus derechos, bien por medio de algún tipo de reparación, bien haciendo justicia y aplicando la ley contra quienes cometieron los crímenes contra sus familiares. Derechos, además, incluidos en el Informe de la CVR, que, como se recuerda, fue instalada por el Ejecutivo.

Derecho o beneficio

El hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas pertenezca al estrato más pobre del país hace que las reivindicaciones por algo que es un derecho—justicia y reparación—corra el riesgo de diluirse y termine por convertirse en un beneficio. "Que nos den algo; que sean reparaciones colectivas o individuales, o salud mental", reclama, por ejemplo, Samuel Gonzales, un campesino de Chincheros (Apurímac) que perdió dos hijos cuando las fuerzas del orden incendiaron su casa. Cuando uno vive en una región totalmente descuidada por el Estado, cualquier ayuda es bienvenida: "Sea lo que sea".

"Es fundamental que la gente logre salir del drama personal y construir una agenda colectiva,

de reivindicación de derechos, no de asistencia", señala Érika Bocanegra, quien acompaña desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDD-HH) a las organizaciones de afectados.

El nuevo liderazgo de los jóvenes

Una de las grandes fortalezas del naciente movimiento de los afectados es que cuenta con nuevos liderazgos compuestos por jóvenes: la Coordinadora Nacional Transitoria de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, un primer intento de coordinación nacional de todas las organizaciones, cuenta entre sus veinticinco representantes con hombres y mujeres de entre 20 y 30 años que eran niños e incluso bebés cuando los militares o Sendero Luminoso se llevaron a sus padres, que vieron cómo sus madres fueron maltratadas por las autoridades, que tuvieron que buscar un refugio tras otro y participar aun siendo niños en la lucha diaria por la supervivencia.

Jóvenes como Percy Huauya, de 28 años, representante del Frente Regional de Organizaciones de Base por la Verdad y Justicia (FROBAVEJ) de Ayacucho, quien señala: "Estamos aquí en esta marcha porque ya era hora de hacer una marcha de manera articulada. Es parte de nuestro fortalecimiento institucional". Él tiene muy claro por dónde tienen que empezar las demandas: por el registro único de víctimas, la creación de un fondo nacional para reparaciones y la formación de juzgados especiales de derechos humanos.



Muchos de los jóvenes líderes son hijos e hijas de madres que integraron las organizaciones "históricas" de víctimas, como ANFASEP, y constituyen hoy un tipo de "bisagra" entre los jóvenes y las "mamás", sobre todo en Ayacucho, donde el liderazgo ha pasado ya a las manos de los jóvenes. En otras regiones, según Percy Huauya, el paso generacional aún no se ha dado o se está peleando.

La gran reivindicación de los jóvenes pasa por la educación: quieren tener acceso preferencial a las universidades y que les den becas; anhelan recobrar las oportunidades que la violencia política les robó: "Mis hermanos y yo logramos terminar el colegio en Ayacucho, pero la economía no nos dio para ir a la universidad", comenta Nora Quispe Ccallacunto, de 21 años, huérfana de padre y madre. "El Estado tiene una obligación con nosotros, porque fue él el que nos puso en esta situación."

Sin embargo, ella misma admite que no es fácil encontrar apoyo en la población: "Mucha gente no quiere seguir luchando, no quiere recordar la violencia. Tal vez porque la violencia solo les ha rozado, mientras que a nosotros nos ha chocado de frente".

Dejar de ser el apadrinado

Alrededor de 90 por ciento de las organizaciones han sido impulsadas por —o cuentan con el apoyo de— una ONG o la Iglesia. Los pocos fondos de los que disponen son administrados u otorgados por las ONG. El ejemplo más reciente es el de la marcha de octubre último: muchos de los participantes pudieron desplazarse a Lima solo gracias a que alguna ONG les pagó el pasaje. Pero esta relación de dependencia es hoy severamente cuestionada.

Heeder Soto, otro líder joven de Ayacucho, piensa que el tiempo del patrocinio de las ONG debe concluir: "Las ONG de derechos humanos y las iglesias son aliados importantes, pero tenemos que arreglar lo del paternalismo. Las familias afectadas deben concluir su proceso y manejar sus propios proyectos".

Esa visión, empero, no es aún muy realista; no, por lo menos, en todos los casos, dado el débil grado de organización, de articulación y hasta de legitimidad de varias de estas organizaciones. Si se calcula que cada una de las casi 70.000 víctimas reportadas en el Informe de la CVR cuenta

Rostros jóvenes: ¿Víctimas o héroes?

Ellos son los nuevos líderes de las organizaciones de afectados o víctimas de la violencia política. Después de escuchar sus historias —como las de tantos otros—, uno se da cuenta de que han dejado atrás el papel de víctimas y están logrando forjarse su propio camino.

Heeder Soto, 23 años, ANFASEP-Jóvenes, Ayacucho



"Primero los militares desaparecieron a mi padre; después Sendero mató a mis tíos. Con mi mamá nos vinimos a Ayacucho. Con muchos niños y jóvenes asistimos al comedor de ANFASEP. Recuerdo aún cuando Adolfo Pérez Esquivel —entonces Premio Nobel de la Paz— vino en 1984 a Ayacucho y marchó con las madres por la plaza. Estuve también en los *Boy Scouts* y después en la organización de los niños trabajadores. En el 2002 formamos ANFASEP-Jóvenes. Soy arteterapeuta; formé mi microempresa de publicidad para poder terminar los estudios. Ahora quiero aplicar mi profesión para ayudar a que otros puedan superar los traumas de la violencia."

Nora Quispe Ccallacunto, 21 años, delegada de ANFAVID-CIDH en la Comisión Transitoria, Lima



"En 1983 los militares desaparecieron a mi padre en la ciudad de Ayacucho. Mi mamá luchó por encontrarlo; luego fue una de las fundadoras de ANFASEP. En 1990 la Policía la sacó a medianoche de la casa, y nunca más la volví a ver. Una tía nos trajo a Lima. En 1996 regresamos a Ayacucho para terminar allá el colegio. Tengo un hijo de un año. Deseo estudiar una carrera. Quiero encontrar los cuerpos de mis padres y que se sancione a los responsables de su muerte."

Percy Huauya, 28 años, presidente de FROBAVEJ, Ayacucho



"En 1983 desaparecieron a mi padre en la provincia de Fajardo. Mi madre nos tuvo que poner a los siete hermanos en un orfanato en Ayacucho. De niño ingresé a ANFASEP, donde me daban alimentación."

"Formé la organización de jóvenes huérfanos. En el 2003 organizamos el primer encuentro regional de organizaciones afectadas. El FROBAVEJ nació en el 2003. Ahora tenemos treinta organizaciones y representamos a unas 1.800 personas."

"Estoy estudiando quinto año de Derecho, porque siempre recuerdo que no teníamos quién nos defiende cuando estábamos en el puericultorio."

"La situación en Ayacucho es muy complicada, porque están los Comités de Autodefensa que temen que se les podría hacer un proceso, y por otro lado el gobierno regional del APRA, que tiene sus aliados del lado de la impunidad."

con solo cuatro familiares, entonces debería haber un movimiento de casi 300.000 personas. La realidad, no obstante, es contundente: cuando mucho, apenas 10.000 están organizadas.

A pesar de sus debilidades, las organizaciones han puesto el dedo en la llaga: las ONG tienen que revisar su relación con las organizaciones. "Hace dos años que están en ese proceso", comenta Érika Bocanegra, de la CNDDHH. Y añade: "Las organi-

zaciones de afectados tienen que consolidarse como parte integral del movimiento de derechos humanos". Al fin y al cabo, cualquier organización —sea de base o promovida por una ONG— es un medio para un fin: que se haga justicia. ■